I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO I

L514
Legislação, Direitos Humanos e Justiça de Transição I [Recurso eletrônico on-line] organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Giovanni Vinicius Caetano e Silva, Farissa Maria Drumond Chequer Queiróz e Filipe Augusto Silva - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5648-922-3
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.
1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória (1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

Universidade de Itaúna
UMA GRANDE UNIVERSIDADE

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO I

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: "Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios". El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos-graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trifronte. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

A HIPERTROFIA DO PODER JUDICIÁRIO: UMA ANÁLISE DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DA QUEBRA DE SIGILO DECRETADA PELA CPMI

THE HYPERTROPHY OF THE JUDICIARY: AN ANALYSIS OF THE DECISION TO SUSPEND THE PRIVACY BREACH ORDER ISSUED BY THE CPMI

Davi Guimarães Martins [1]
Rodrigo de Pinho Maia Filho [2]
Helen Cristina de Almeida Silva [3]

Resumo

O trabalho objetiva estudar a legitimidade da decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, que suspendeu a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Silvinei Vasquez, determinada pela CPMI do 8 de janeiro. A partir disso, pretende-se analisar a tendência recente de ampliação do Judiciário, da sua capacidade de interpretar a Constituição e realizar controle jurisdicional sobre os demais Poderes da República Brasileira. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético e, quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a pesquisa teórica. Preliminarmente, conclui-se que o Poder Judiciário está progressivamente consolidando uma situação de sobreposição em relação aos demais Poderes.

Palavras-chave: Cpmi, Poder judiciário, Decisão

Abstract/Resumen/Résumé

The work aims to study the legitimacy of the decision handed down by Minister Nunes Marques, who suspended the breach of banking, tax and telephone secrecy of Silvinei Vasquez, determined by the CPMI of January 8. From this, it is intended to analyze the recent trend of expansion of the Judiciary, its capacity to interpret the Constitution and carry out jurisdictional control over the other Powers of the Republic. The reasoning developed was predominantly dialectical and theoretical research was adopted. Preliminarily, it is concluded that the Judiciary is progressively consolidating a situation of overlap in relation to the other branches.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Cpmi, Judiciary, Decision

---

[1] Graduando em Direito, modalidade Integral, pela Dom Helder Câmara (DHC). Pesquisador do GIC Direito e tecnologia, vinculado à DHC.

[2] Graduando em Direito, modalidade Integral, pela Dom Helder Câmara (DHC). Pesquisador do GIC Direito e tecnologia, vinculado à DHC.

[3] Helen Cristina de Almeida Silva - Mestra em Direito Processual pela PUC Minas. Professora de Direito Processual - Dom Helder. Profa. Pesquisadora do GIC Direito e Tecnologia da Dom Helder.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O dia 8 de janeiro de 2023 marcou significativamente a história política do Brasil. Na referida data, um grupo composto por centenas de pessoas invadiu e arrasou os prédios Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, caracterizando um episódio notoriamente antidemocrático e repulsivo, o qual mobilizou as instituições nacionais em prol da manutenção do Estado Democrático de Direito e da responsabilização dos indivíduos que protagonizaram os ataques.

Nesse sentido, destaca-se a instauração de uma Comissão Parlamentar Mista (CPMI) para investigar os atos de ação e omissão ocorridos durante o ataque na sede dos Três Poderes da República. No curso das investigações, os parlamentares requereram o afastamento do sigilo bancário, fiscal e telefônico de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que supostamente organizou operações em estradas durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para manipular os resultados do processo eleitoral. No entanto, o Ministro Nunes Marques, em sede de Mandado de Segurança, suspendeu as quebras de sigilo decididas pela CPMI.

Considerando o contexto supracitado, a presente pesquisa gira em torno da seguinte problematização: a decisão da CPMI está normativamente adequada? A decisão do Ministro Nunes Marques está normativamente (requisitos e fundamentos) adequada? Como hipótese, aponta-se que o julgador equivocou-se na decisão proferida, valendo-se do controle jurisdicional que lhe é atribuído para interferir num ato típico do Poder Legislativo, mais especificamente, num ato típico dos integrantes da CPMI.

O objetivo principal da pesquisa é analisar uma possível interferência do Terceiro Poder na esfera de competência do Poder Legislativo. Como objetivos específicos do trabalho, enumeram-se os seguintes: i) estudar os requisitos normativos para a quebra de sigilo; ii) identificar os legitimados e os procedimentos jurídicos necessários à decretação da quebra de sigilo; iii) analisar a decisão proferida pelo Min. Nunes Marques, em sede de Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para suspender a quebra de sigilo decretada pela CPMI; iv) verificar a compatibilidade de ambas as decisões ao modelo constitucional democrático consagrado pela Constituição de 1988.

A pesquisa que se propõe, na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), pertence à vertente metodológica jurídico-social. No tocante ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido

o tipo jurídico-projetivo. O raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético e, quanto ao gênero de pesquisa, foi adotada a pesquisa teórica.

1. A SUSPENSÃO DA QUEBRA DE SIGILO DECRETADA PELA CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, conhecida como CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, teve como finalidade a investigação dos atos de ação e omissão ocorridos nas sedes dos Três Poderes da República, em Brasília. Nesta fatídica data, supostos grupos criminosos invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, tornou-se imprescindível apurar o eventual ocorrido para a responsabilização dos indivíduos que tenham incitado, auxiliado, patrocinado ou se omitido diante desse cenário, com o objetivo de assegurar a devida punição de quem atenta contra o Estado Democrático de Direito.

A partir disso, o Congresso Nacional, em sua competência constitucional, instaurou uma CPMI para realizar essa função investigativa sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 58, §3° define que o Congresso Nacional e suas respectivas Casas podem criar comissões que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, desde que sejam para apuração de fato determinado e por prazo certo, de forma que poderá encaminhar suas conclusões para o Ministério Público realizar a responsabilização civil ou penal dos criminosos.

A partir disso, como exposto por Rômulo de Andrade Moreira (2021), apesar das Comissões Parlamentares de Inquérito possuírem poderes investigatórios, ainda existe uma reserva de jurisdição, em que alguns atos não são possíveis de serem executados pelo Poder Legislativo. A exemplo disso, a busca e apreensão domiciliar, a interceptação telefônica e a decretação de prisão (exceto o flagrante) são ações exclusivas das autoridades judiciárias. Por outro lado, a CPI detém competência para decretar, de maneira autônoma, a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido, apesar das Comissões Parlamentares de Inquérito possuírem autoridade para decretar com autonomia a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico, devem respeitar alguns requisitos para realização de tal ato. Sobre isso, na apreciação do MS 24.817, o Ministro Celso de Mello, relator, de 5 de novembro de 2009, ficou estabelecido da seguinte forma:

> As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir

> de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (BRASIL, 1989)).

Dessa forma, é notória deveras arbitrariedade para decretar essa quebra de sigilo por parte da CPI, visto que, são requisitos mínimos como mero indícios e existência concreta de causa provável que possibilite o uso dessa medida, de modo que não constitui um rol imensurável de condições, haja vista se tratar de ato conivente com a finalidade investigativa das Comissões Parlamentares de Inquérito.

Nessa perspectiva, na 8ª Reunião da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, ocorreu o pedido do afastamento do sigilo fiscal, bancário e telefônico do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. Fundamentado de forma escorreita, com o que foi apresentado no MS 39309, Silvinei Vasques foi o responsável por permitir e incentivar a obstrução de rodovias por caminhoneiros que questionavam os resultados da eleição de 2022, ato que fez parte da origem de todo esse movimento que acarretou nos crimes realizados em 8 de janeiro de 2023. Ademais, além de diversas outras ações suspeitas do ex-diretor geral da PRF, Vasques foi afastado do seu cargo por improbidade administrativa, de forma que foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) por uso indevido do cargo durante as eleições.

Portanto, é evidente que existem ao menos meros indícios de uma possível relação entre Silvinei Vasques e as práticas criminosas ocorridas em 08/01/2023, haja vista toda sua participação em movimentos de mesmo viés no final de 2022. Isso já seria o necessário para a decretação da quebra de sigilo como já exposto, de forma que essa medida apenas viabiliza a apuração dos verdadeiros culpados pelas infrações penais realizadas nas sedes dos Três Poderes da Repúblicas. Essa providência não é penalizadora e não desrespeita o princípio da presunção de inocência garantido no artigo 5º, inciso LVII da Carta Magna, somente atende ao objetivo da CPMI em questão, visto que, por ter prazo determinado, deve agir incisivamente para a descoberta dos fatos a qual propôs investigar.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão monocrática proferida pelo Ministro Kassio Nunes Marques em sede de Mandado de Segurança (MS 39309 MC/DF), suspendeu a quebra de sigilo decretada pela CPMI, alegando ter sido embasada em premissa genérica e abstrata. A esse respeito, é explícito que essa suspensão caracteriza o Poder Judiciário interferindo nas atividades do Poder Legislativo de acordo com seus próprios interesses, mesmo que, notoriamente, cumprido os requisitos para a quebra do sigilo, com

todos os indícios e suspeitas envolvendo Silvinei Vasques. Desse modo, o STF, com todo seu controle e poder jurisdicional, impede o andamento das investigações, assim, dificultando o objetivo proposto pela CPMI em tela.

A arbitrariedade do Poder Judiciário, por meio de decisões monocráticas advindas do Supremo Tribunal Federal, as quais decidem de acordo com os viéses e interesses de seus ministros, pode trazer um fenômeno de hipertrofia desse poder e de suas decisões jurisdicionais, o que ameaça não só as instituições democráticas, mas também o sistema de freios e contrapesos estabelecidos na República Federativa do Brasil.

2. A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO FRENTE AOS DEMAIS PODERES NA CONTEMPORANEIDADE

A partir da exposição fática realizada no último capítulo e da análise da decisão proferida pelo Ministro Kassio Nunes Marques em sede de Mandado de Segurança, é possível realizar constatações acerca da ampliação do papel assumido pelo Poder Judiciário na conjuntura contemporânea, a qual não consiste meramente numa expansão funcional e objetiva, mas num aumento considerável do poder de interpretação do juiz e do controle jurisdicional sobre o legislador (Maus, 2000).

Em princípio, há de se destacar que, desde o período compreendido após a Segunda Guerra Mundial e a estruturação dos Tribunais Constitucionais, o juiz é globalmente concebido como sendo uma figura garantidora de promessas e como uma espécie de "engenheiro social", responsável por compensar os déficits de igualdade material presentes na sociedade (Nunes, 2011). No âmbito interno, especialmente com o advento da Constituição Federal de 1988, pode-se dizer que os julgadores atuam como um mecanismo supressor dos déficits de funcionalidades dos demais Poderes (Bahia, 2009, p. 293 *et seq* apud Nunes, 2011).

Os fatos supracitados ilustram a dinâmica de sobreposição do Judiciário em relação às demais instituições do país e permitem a compreensão acerca da estrutura que legitima as ingerências do terceiro poder perante a autonomia do legislativo e do executivo. No caso da decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, pode-se dizer que a segurança concedida pelo magistrado representa um ato limitador da autonomia e competência atribuída constitucionalmente aos congressistas, porquanto, conforme debatido outrora, a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico consiste em um ato típico dos membros da CPMI, sendo necessários meros indícios de causa provável que legitime a medida excepcional, que foram observados no caso concreto.

O ato de exasperação cometido pelo julgador compreende-se através da ampla liberdade interpretativa atribuída ao Judiciário na contemporaneidade e do amplo controle jurisdicional face aos demais Poderes que, consequentemente, limita seu campo de atuação autônoma. Sobre a liberdade decisional e interpretativa atribuída aos juízes, Nunes (2011) defende a instauração de um quadro de anarquia interpretativa no âmbito nacional, causadora de inseguranças e incertezas nas relações jurídicas:

> No entanto, em face da pressuposição de que os ministros devem ter liberdade decisória, cria-se um quadro de "anarquia interpretativa" no Brasil na qual nem mesmo se consegue respeitar a história institucional da solução de um caso dentro de um mesmo tribunal. Cada juiz e órgão do Tribunal julgam a partir de um "marco zero" interpretativo, sem respeito à integridade e ao passado de análise daquele caso; permitido a geração de tantos entendimentos quanto sejam os juízes. Evidentemente que esse quadro pode ser visto como exagerado, mas ele tenta promover um alerta e uma provocação aos pesquisadores e "operadores" em geral dos riscos de uma padronização decisória sem uma teoria consistente de como se articular os precedentes em nosso país (Nunes, 2011).

Nesse sentido, Maus (2000) discorre sobre o processo de legitimação da jurisprudência através da introdução de pontos de vista morais e de valores, que "imunizam" as decisões judiciais de críticas e possibilitam uma desvinculação da Justiça perante qualquer sintonização com a vontade popular. Dessa forma, os responsáveis por guardar a Constituição subvertem-na e justificam suas ações pautadas na premissa de "atuam em nome do povo" (Maus, 2000, p. 195).

No mesmo texto, a autora exemplifica a estrutura de poder e sobreposição do Judiciário valendo-se do exemplo do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha: "O TFC submete todas as outras instâncias políticas à Constituição por ele interpretada e aos princípios suprapositivos por ele afirmados, enquanto se libera ele próprio de qualquer vinculação às regras constitucionais" (Maus, 2000, p. 192).

Percebe-se que o processo de subversão do aparato constitucional ocorre por meio da relativização do texto positivado e posterior transmutação da Carta Magna em uma dita "ordem de valores" (Maus, 2000, p. 192), que concretiza a desvinculação do terceiro poder ao sistema jurídico vigente (porquanto subverte a Lei Maior) e sobrepõe às demais instituições ao seu controle. O caso objeto do presente estudo representa adequadamente o processo de sujeição exacerbada ao controle judicial e a livre interpretação do Ministro, que relativizou o entendimento jurisprudencial firmado previamente pelo próprio STF.

Nesse diapasão, Maus (2000) explica o processo supracitado:

> A transformação da Constituição em uma "ordem de valores" confere às determinações constitucionais individuais (por meio da "abertura" de suas formulações) uma imprecisão tal que é capaz de suprir e ampliar voluntaristicamente

> os princípios constitucionais positivados. No sopesamento de valores do TFC manifestam-se vários critérios óbvios de eficiência que não encontram no texto /constitucional o menor ponto de apoio: o controle de constitucionalidade das leis e a relevância constitucional de processos são exercidos, por exemplo, por meio da verificação da "aptidão funcional das empresas e do conjunto da economia" , da "capacidade funcional do Exército" ou especificamente da "manutenção da capacidade operativa das instituições penais", enquanto as determinações constitucionais específicas que lhes dizem respeito podem ficar em segundo plano. As garantias constitucionais escritas são contrapostas deste modo à reserva das idiossincrasias não-escritas dos aparatos econômicos e políticos. Com estes e outros critérios de verificação, mas também com o apego do Tribunal às suas próprias decisões, consistentes no entendimento de que as restrições de direitos fundamentais por via de sopesamento de valores se referem somente às peculiaridades do caso concreto — isto é, podem ser determinadas de outra forma em circunstâncias diferentes —, a estrutura jurídica é adaptada ao modo situacional de funcionamento do aparato administrativo (Maus, 2000, p. 200).

Pode-se dizer que, a partir da livre interpretação constitucional e do controle jurisdicional exercido em relação aos atos praticados pelo Legislativo e pelo Executivo, o Terceiro Poder consolida sua posição de preponderância e se legitima como o responsável por ditar a “palavra final” na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Poder Legislativo se constitui em suas funções típicas, tanto de legislar, quanto de fiscalizar, sendo que as Comissões Parlamentares de Inquérito representam uma manifestação do poder fiscalizatório atribuído ao Legislativo, haja vista possuir poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, a qual tinha como objetivo investigar os infratores que realizaram os atos ilícitos e antidemocráticos nas sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, é o exemplo fático desse Poder atuando de acordo com sua competência constitucional.

Nesse sentido, uma das medidas para atingir a finalidade investigativa da CPMI foi a decretação da quebra de sigilo de Silvinei Vasques, um dos suspeitos de envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro. À vista disso, a suspensão dessa medida por decisão monocrática do STF, feita pelo Ministro Kassio Nunes Marques, nada mais é que o Poder Judiciário agindo com arbitrariedade de acordo com interesses próprios e impedindo que os outros poderes realizem suas funções de maneira plácida.

Esse cenário se assemelha a um fenômeno dissertado por Ingeborg Maus, em que a Suprema Corte, por serem os responsáveis pela garantia da Constituição, utilizam-se desse atributo para interpretar a Carta Magna de forma discricionária e realizar um controle jurisdicional arbitrário. Isso acarreta em um efeito de hipertrofia do Poder Judiciário e de suas decisões jurisprudenciais, o que, paralelamente, descredibiliza os outros poderes, que são

peças essenciais para a manutenção de um Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n° 39.309. Impetrante: Silvinei Vasques. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do Dia 8 de Janeiro. Relator: Ministro Nunes Marques. Decisão 26 de setembro de 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n° 24.817. Impetrante: PB Câmbio e Turismo LTDA. Impetrado: Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI do Banestado. Relator: Ministro Celso de Mello. Acórdão 03 de fevereiro de 2005.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. **(Re)pensando a pesquisa jurídica**: teoria e prática. 5ª. ed. São Paulo: Almedina, 2020.

MAUS, Ingeborg. Tradução do alemão: Martonio Lima e Paulo Albuquerque. JUDICIÁRIO COMO SUPEREGO DA SOCIEDADE O PAPEL DA ATIVIDADE JURISPRUDENCIAL NA "SOCIEDADE ÓRFÃ. **Novos Estudos**, nº.° 58, pp. 183-202, nov. 2000.

MOREIRA. R. **A comissão parlamentar de inquérito e a quebra do sigilo telefônico e telemático**. Consultor Jurídico, 15 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jun-15/moreira-cpi-quebra-sigilo-telefonico-telematico>. Acesso em: 01 nov. 2023.

NUNES, Dierle. Politização do Judiciário no Direito Comparado - Algumas Considerações. **Constituição e processo**: entre o direito e a política. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 31-46

SARNAMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. **Direito Constitucional:** teoria, história e métodos de trabalho. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014.